

Gobierno de Lula y lulismo: examinando algunas hipótesis sobre las condiciones de posibilidad y la naturaleza del lulismo

Lula's Government and lulismo: examining some hypotheses about the conditions of possibility and nature of Lullism

Thiago Melamed de Menezes y Vicente Palermo

Thiago Melamed de Menezes es funcionario del Ministerio de las Relaciones Exteriores del Brasil y cursa la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales de la UBA, Brasil.
E-mail: tmelamed3@yahoo.com

Vicente Palermo es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Gino Germani- UBA, Argentina.
E-mail: vicentepalermo@gmail.com

resumen

Con el éxito que, en general, se le atribuye a las dos gestiones de Lula, a partir de 2003, el debate acerca del llamado lulismo de a poco desplazó lo que era hasta entonces una atención puesta en el Partido de los Trabajadores (PT), para focalizarse en Lula y su liderazgo. Apoyándose en la literatura sobre el tema, el artículo examina distintas interpretaciones existentes, con el cuidado de distinguir entre las tesis respecto a las condiciones de posibilidad del lulismo y su análisis como fenómeno político.

En relación a las primeras, son enfatizadas cuestiones como las distintas visiones acerca del modelo de acumulación que estuvo en vigor y de las políticas de redistribución de ingresos adoptadas durante sus dos administraciones. Se observan divergencias a la hora de determinar en qué medida el gobierno Lula siguió el modelo implantado por la administración que lo antecedió y a qué se debería su mayor éxito político.

En lo que atañe al segundo, las perspectivas divergen entre considerar el lulismo un nuevo ropaje para prácticas de ocupación y reparto del gobierno y verlo como un fenómeno de liderazgo que aportaría importantes contenidos de política. Los autores también presentan su propia hipótesis.

palabras clave

lulismo / Partido dos Trabalhadores / Brasil / liderazgo político

summary

Along with the success that is generally attributed to the two Lula's administrations starting in 2003, the debate about the so called lulism has gradually displaced what was until then an attention to the Worker's Party (PT), to focus on Lula and its leadership. Resting on the Literature on the subject, the article examines different existing interpretations, distinguishing between thesis regarding the conditions of possibility of lulism and its analysis as a political phenomenon.

In relation to first ones, issues such as the different visions about the accumulation model that was in force and the policies of redistribution of income adopted during its two administrations are emphasized. Differences are observed at the time of determining to what extent Lula's government continued the model implanted by the preceding administration and what would explain its greater political success.

With respect to the second, perspectives diverge from considering lulism a new disguise for practices of occupation and partisan partition of government to regarding it as a phenomenon of leadership that adds important contents of politics. The authors also present their own hypothesis.

keywords

lulismo / Workers Party / Brasil / political leadership

La llegada de Lula a la Presidencia del Brasil, y sus dos gestiones presidenciales consecutivas, así como la enorme popularidad con que aquel finalizara su mandato, y el éxito que, en general, se le atribuye a sus gestiones, han estimulado el debate interpretativo sobre el lulismo como fenómeno político. Lo que hasta 2003 era básicamente una atención puesta en el Partido de los Trabajadores (PT), aun cuando reconociera un papel protagónico de Lula, se desplazó hasta focalizarse en Lula y su liderazgo, relegando al PT a un plano secundario. Siguiendo ese desplazamiento, el propósito de nuestro artículo es el de examinar distintas interpretaciones sobre el lulismo, abordajes que combinan elementos económicos, sociológicos y politológicos. A tal efecto, el artículo está dividido en dos partes; en la primera discutiremos las condiciones de posibilidad del lulismo según diversas interpretaciones centradas especialmente en las vicisitudes del modelo de acumulación y las políticas de redistribución de ingresos; en la segunda, lo analizaremos como fenómeno político, y desplegaremos nuestra propia interpretación sobre el mismo.

Parte I – Interpretaciones sobre las condiciones de posibilidad del lulismo

El lulismo se construye en el contexto de una transformación modernizadora –básicamente los años de Fernando Henrique Cardoso (FHC)– que lo hace posible. Al mismo tiempo, éste proporciona a aquel proceso de transformación lo que no consiguió FHC: su legitimación social y democrática. Las tres interpretaciones que presentaremos parten de un presupuesto básico común: entienden que el lulismo se desarrolla sobre un nuevo patrón de acumulación del capital que, en un comienzo, fue establecido por el gobierno de FHC –el punto de inflexión lo constituye el Plan Real– y luego se extendió y consolidó durante la administración Lula.

Las tres interpretaciones que se presentarán a continuación versan sobre algunas condiciones de posibilidad del lulismo. No sobre el lulismo en cuanto fenómeno político, que será discutido en la segunda parte del artículo, sino sobre las orientaciones del gobierno de Lula que permitieron que el fenómeno ocurriera. Las divergencias aquí residen en la tentativa de determinar en qué medida el gobierno Lula siguió el modelo implantado por la administración que lo antecedió y a qué se debe su mayor éxito político.

a. La interpretación de la continuidad esencial del modelo, complementado con más política social

La primera línea interpretativa sostiene que el gobierno de Lula siguió fundamentalmente el modelo implantado a partir del gobierno de Collor y consolidado en el gobierno posterior, de FHC, y lo complementó, en el margen, con un incremento de política social. De acuerdo con esa interpretación, Lula y su gobierno representarían, en lo esencial, una continuidad en lo que se refiere al modelo de acumulación y política distributiva. Lula habría dado seguimiento al proceso de apertura y liberalización, caracterizado por las privatizaciones, la quiebra de mo-

nopolios del Estado en la economía (hidrocarburos y minerías, entre otros), la desregulación de los mercados de trabajo y financiero y el repliegue de la presencia del Estado en las actividades de producción directa. En teoría, se buscaba una mayor competitividad, que provendría de la apertura a la competencia internacional de una economía antes cerrada, la economía del modelo de sustitución de importaciones.

Esa línea interpretativa enfatiza una transición programática abrupta y radical que habría sido realizada por Lula y el PT. Partiendo de propuestas de cambios profundos e inmediatos en el modelo económico, respaldadas hasta poco antes de la llegada al poder, ambos habrían virado, a partir de la célebre “*Carta ao Povo Brasileiro*”¹, hacia la defensa de los contratos y las reglas del juego establecidas. Programas anteriores del Partido, esbozados en documentos como “*Concepções e diretrizes do programa de governo do PT para o Brasil: a ruptura necessária*”, de 2001, prometían una ruptura con el “modelo neoliberal”, denunciando asimismo los acuerdos con el FMI. Proponían, en ese sentido, una alteración profunda centrada en el fortalecimiento del mercado interno –“mercado de consumo de masas”– y medidas de fuerte cuño redistributivo, tales como la reforma del sistema tributario con orientación progresiva y la siempre postergada reforma agraria. Ampliamente tomada como punto de inflexión, la “Carta”, en cambio, aunque mantenga la promesa de operar un “cambio del modelo”, introduce el compromiso de “respeto a los contratos y obligaciones del país” y rechaza salidas “voluntaristas” para la crisis económica y social que atribuía al modelo entonces vigente.

La interpretación que privilegia el supuesto “continuismo” subraya el mantenimiento, bajo Lula, de la tríada de la política macroeconómica heredada de FHC: metas de inflación, cambio flotante, y superávits primarios (antes del pago de intereses). Los autores que sostienen el continuismo son tanto críticos como defensores del mismo. Para los críticos de ese modelo macroeconómico, él significaba, en la práctica, el control de la inflación ejercido por una política monetaria que conducía a elevadas tasas reales de interés y, en consecuencia, a una política cambiaria de sobrevalorización del real. Otro corolario de la misma fórmula, para sus críticos, sería la necesidad de disciplina fiscal, siempre redoblada, a fin de impedir la explosión de la deuda pública, ya que su remuneración está vinculada también a la tasa de interés, el instrumento utilizado para el control inflacionario. Así, la contrapartida de las presiones fiscales creadas por la necesidad de remuneración de la deuda sería una continua expansión de la carga tributaria, con lo que se cierra el círculo, generando una tendencia a la financierización de la economía, apoyada especialmente en la deuda pública.

Según esta primera posición, no se trata, por lo tanto, de un modelo en el que la redistribución sea endógena al crecimiento. Las mejoras, según esa interpretación, ocurrirían gracias a las políticas sociales, que compensarían parcialmente el modelo excluyente. La interpretación que privilegia la continuidad subraya la incorporación, por el gobierno de Lula, de una concepción de política social basada en las recetas defendidas por el Banco Mundial en las últimas dos décadas, que prescriben la focalización de los gastos (Novelli, 2010).

Las políticas sociales, relativamente baratas, conferirían al modelo de acumulación respaldo popular y legitimidad. Los intérpretes de la continuidad, pero que alientan una interpretación menos crítica, ponen el acento en ellas. Tales políticas, surgidas con Cardoso y expandidas con Lula, significarían, además, el triunfo de una *pragmatic market orientation* que ha venido a ocupar una suerte de posición de consenso centrista, constituido, como ya ha sido apuntado por Kingstone & Ponce (2010), por tres cruciales elementos: firme compromiso con la estabilidad monetaria, abordaje flexible de la *market reform* agenda y compromiso para encarar la pobreza y la inequidad. Ello estaría inscripto en un implícito consenso *cross-party*, en que las innovaciones de una fuerza –la coalición anterior nucleada por el PSDB– ganan el respaldo de la otra y viceversa. En esta visión, se reconoce que hay diferencias entre ambas fuerzas, pero se cree que las similitudes las superan. La administración Cardoso habría implantado en el gobierno federal innovadoras reformas en salud y educación, algunas originadas en gobiernos estatales o municipales del PT. La popularidad de algunos de estos programas habría disparado un proceso de competencia de *credit claiming* entre el PT y el PSDB. El ejemplo más claro sería el programa Bolsa Familia en que el PSDB se inspira en el PT de Brasilia, y luego el gobierno de Lula retoma el programa (Power, 2010).

En manos de sus críticos más fuertes, la interpretación admite, desde luego, que hubo mejorías absolutas de sustancial importancia en los sectores de menores ingresos, pero, tomando el indicador más importante, el índice de Gini, la mejora es poco significativa. Eso porque las políticas sociales implantadas no pasarían de un tímido paliativo frente a las enormes trabas a la reducción de la pobreza generadas por la política macroeconómica. Sin duda, el control de precios –objetivo principal de esta última– funciona, dado que la tasa de inflación oficial del país se mantuvo, en los ocho años del gobierno de Lula, en un promedio anual de 5,78% y dentro de la meta establecida en siete oportunidades (la excepción fue el primer año de su mandato, 2003). Sin embargo, el crecimiento económico presenta el patrón de “*stop-and-go*” y se queda bastante abajo del promedio internacional de los demás países emergentes en el periodo y de los promedios históricos del país, aunque, como veremos en la interpretación siguiente, con importante aceleración en los últimos años.

Los partidarios de la interpretación del continuismo como trazo predominante del gobierno de Lula se dividen a la hora de apuntar las razones de lo que consideran un débil desempeño económico del país en el periodo. Hay quienes, como Leda Paulani y Reinaldo Gonçalves, lo atribuyen a características inherentes al modelo, expresamente lo referido a la financierización. Esa es también la visión de Bruno:

Sob finanças liberalizadas e acumulação rentista, a política monetária torna-se o instrumento por excelência da garantia da estabilidade financeira e de preços num ambiente macroeconômico subordinado à lógica e natureza da revalorização dos capitais na circulação bancária e financeira (Bruno, 2010).

Hay otros –como Edmar Bacha, Persio Arida y Andre Lara Resende– que, al contrario, consideran que los problemas residirían en la interrupción de las “reformas estructurales” de índole liberal con el gobierno Lula y en la falta de una disciplina fiscal aún más rigurosa. De un modo u otro, el problema que tiene esta interpretación, ya sea en su vertiente favorable al modelo anterior o en su vertiente crítica, es que hace descansar el éxito político de Lula en la mera continuidad, y no captura lo que Lula aporta de novedoso. Asimismo las dos vertientes tienen, al final, problemas de coherencia lógica. Por ejemplo, los críticos: ¿Cómo explican que Lula gobernara ocho años con un modelo tan defectuoso y llegara al fin del mandato en las condiciones en que llegó? Confrontados a esta realidad caen en una condición casi de “disonancia cognitiva”. A menudo, cuestionan el “éxito” del gobierno de Lula, afirmando que los avances son muy modestos, que los datos son falseados (por ejemplo, los datos de ascensión de millones a la clase media, ya que los criterios para esa clasificación son los del Banco Mundial, los menos ambiciosos, que no garantizan efectivamente condiciones de bienestar mínimas, etc.). Como no se puede negar el hecho del éxito político expreso en la popularidad del presidente, en su reelección y en la elección de Dilma, sostienen construcciones como la de “*hegemonia às avessas*” (hegemonía al revés) propuesta por Chico (Francisco) de Oliveira, que si bien es sumamente elegante, no da cuenta de la mejora tanto en las condiciones materiales como simbólicas de los sectores populares:

E o consentimento se transforma em seu avesso: não são mais os dominados que consentem em sua própria exploração; são os dominantes –os capitalistas e o capital, explicita-se– que consentem em ser politicamente conduzidos pelos dominados, com a condição de que a ‘direção moral’ não questione a forma da exploração capitalista (Oliveira, 2010).

Los entusiastas de lo que sería la continuidad con el modelo anteriormente vigente parecen padecer de iguales inconsistencias a la hora de explicar el mayor éxito político obtenido por Lula. Lo debitaban, comúnmente, a la suerte de contar con un escenario económico externo benigno. Sin embargo, esta argumentación se debilitó con la llegada de la crisis económica, que se inició en 2008, y que no derrumbó el prestigio de su gobierno. Tenemos así una popularidad que no se altera, en el marco de una continuidad en la gestión pero que debe enfrentar una crisis (con buenos resultados, dígame de pasada). El modelo, esencialmente, no sufrió cambios, pero ¿el éxito político de Lula dependió meramente de esta continuidad? Nadie ignora que entre la alicaída popularidad de FHC a su salida, y la sólida popularidad de Lula hay un salto, y es un salto que no puede ser explicado en esos términos.

b. La interpretación de la redefinición significativa del modelo

La segunda interpretación sostiene que Lula, al incorporar novedades en términos neodesarrollistas y redistributivos que apuntan a mejoras en las condiciones

de vida de las capas pobres, no se sale del modelo pero lo redefine parcial aunque significativamente. Esa visión privilegia en su análisis elementos de continuidad y de ruptura con el gobierno anterior, pero tiende a atribuir la responsabilidad por el éxito a las correcciones de rumbo y las innovaciones traídas al modelo.

Esa corriente interpretativa enfatiza una serie de condicionantes negativos con los que tuvo que enfrentarse el nuevo gobierno a partir de la asunción en 2003. En ese sentido, es comúnmente mencionada la fragilidad externa que habría llevado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por el cual fue garantizado el aporte de recursos a las reservas internacionales del país, a cambio de la aceptación de una serie de condicionalidades que limitaban la soberanía en el campo económico. Los problemas derivados de esa situación son legados al nuevo gobierno, como el salto en la deuda líquida del sector público, el bajo crecimiento del PIB, las altas tasas de desempleo y la reducción del poder de compra del salario mínimo (había caído de US\$ 110 en 1995 a US\$ 80 en 2002) (De Paula, 2011). El endeudamiento público, que había saltado de un 29% del PIB a casi un 56% durante el mandato de Cardoso, generaba gran fragilidad, no sólo por su monto, sino también por su plazo corto y por el hecho de que esa deuda estaba vinculada, en gran medida, o a la tasa básica de intereses o al cambio (Novelli, 2010; Mineiro, 2010).

Aquel pasivo económico permitió al entonces flamante gobierno construir una narrativa de diferenciación política que destacaba la carga heredada de la administración anterior: la llamada “herencia maldita”. Bajo el peso de esos severos condicionantes negativos, el nuevo gobierno habría optado por no romper con el modelo vigente a fin de evitar una crisis económica aún mayor, que podría desdoblarse en una crisis política capaz de amenazar incluso la conclusión del mandato. Una parte de la antigua militancia no perdonó al partido por la adaptación amplia del programa una vez que ganó las elecciones, acuñando la expresión “estelionato electoral” (estafa electoral) y afirmando que se trataba de la continuidad del “modelo neoliberal” y del “tercer mandato de FHC”. Otros entrevistaron en el transcurrir del mandato una redefinición significativa del modelo. Estos últimos son aquellos que dan cuerpo a la segunda visión a la que se dedica este apartado. Ellos sostienen que el gobierno de Lula, después de la conquista de la confianza del mercado financiero, realmente implementó de a poco una agenda propia. Defienden, igualmente, que una importante distinción del modelo implementado, observada entre los dos gobiernos de Lula, estaría directamente relacionada al cambio de equipos en el área económica del gobierno.

Como es sabido, en marzo de 2006, en medio de un escándalo político, Antonio Palocci fue sustituido en el Ministerio de Hacienda por Guido Mantega. Palocci, desde la campaña presidencial e inmediatamente como coordinador del equipo de transición, habría funcionado como el principal puente entre el nuevo gobierno, el empresariado y el sistema financiero. Como ministro de Hacienda, armó un equipo con nombres como Marcos Lisboa y Murilo Portugal, defensores de propuestas que, para muchos, representaban no sólo la continuidad del modelo anterior, sino además su profundización. Es el caso de la autonomía del Banco Central y de las reformas tributaria y de la previsión social (Novelli, 2010; De

Paula, 2011). Con el cambio de Palocci por Mantega en 2006, hubo una amplia modificación en el equipo económico, incorporándose al gobierno nombres como Bernard Appy y Julio Gomes de Almeida (que posteriormente dio lugar a Nelson Machado). El propio ascenso de Dilma Rousseff a la jefatura de la Casa Civil, en 2005, puede ser analizado a la luz de ese proceso. Esos economistas de perfil neo y post-keynesiano provenían de la Facultad de Economía de la Unicamp, centro “*desenvolvimentista*” (desarrollista), mientras que, en el equipo anterior, la predominancia eran cuadros formados en la PUC/RJ (cuyo Departamento de Economía tiene notoria orientación neoclásica) y con tránsito por el sistema financiero y/o instituciones multilaterales. Por ende, bajo esa nueva hegemonía teórica, para esa línea interpretativa, el gobierno alteró significativamente su orientación.

Lo que se vio en los años siguientes fue un ejemplo de la apuesta desarrollista de conjunción entre inversión y consumo. El gobierno partió de los programas de complementación de la renta y del fomento del crédito dirigido a los segmentos de la base de la pirámide, para generar un impulso de consumo con fuerte multiplicador económico en áreas estructuralmente deprimidas, instaurando un círculo virtuoso de inversiones de las empresas para atender al consumo creciente. Así, para esta segunda interpretación, los elementos de redefinición del modelo y los sociales redistributivos, interactúan entre sí virtuosamente.

Esta interpretación destaca también el importante impulso de la inversión privada con subsidio estatal, que a su vez habría representado un factor de discontinuidad respecto al periodo anterior. En el ámbito del BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) se pone progresivamente en marcha una ambiciosa –en valores– política industrial. El Banco actúa en el sentido de capitalización de los grandes grupos empresariales nacionales y, en el contexto de la incipiente internacionalización de estos conglomerados, impulsa y parcialmente direcciona este proceso (Ribeiro e Kfour, 2010). Asimismo, el gobierno lanzó, en 2006-2007, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que de a poco ha promovido una lenta recuperación de la capacidad estatal de invertir. El foco del programa es la creación de la infraestructura necesaria para apoyar la ampliación de la capacidad instalada direccionada hacia la atención del consumo en ascenso, o sea, la reanudación de la antigua propuesta del PT de basar el modelo económico en la creación y fortalecimiento de un amplio mercado de masas. Partiendo de un nivel extremadamente bajo, el gobierno hace un esfuerzo para reactivar la inversión estatal, sea por la vía de la ejecución directa, sea por la vía de las empresas públicas, que llegan a equipararse al conjunto del Estado en términos de capacidad de inversión (este es el caso de la Petrobras).

Sin embargo, en paralelo a esa nueva orientación continuó en vigor una lógica de acumulación basada en la financierización, principalmente aquella vinculada a la dinámica de la deuda pública, y capitaneada por el Banco Central, el cual se mantuvo durante todo el periodo con el mismo equipo. El PAC, por su parte, habría funcionado, en oposición a esa tendencia, como una especie de carta-programa de ese ensayo de coalición anti-rentista, en que los bancos estatales actúan para proveer la economía del crédito no canalizado por el sistema financiero absorbido con

los títulos públicos. De esa manera, el gobierno fuerza una ampliación del crédito en la economía, que en el segundo mandato pasó del 25% al 40% del PIB (Barros Silva y otros, 2010), en un proceso en el que el BNDES amplía su carta de créditos exponencialmente, prestando a intereses más bajos. Todo eso ocurrió, por lo tanto, en tensión con el Banco Central. La propia convivencia entre el ala del gobierno de perfil más “desarrollista” y el BC “financista”, en el periodo, generó críticas de desarticulación e incluso contradicción (“esquizofrenia”) entre la política fiscal y la monetaria.

Independientemente de esa tensión, los defensores de la interpretación exhiben una serie de indicadores que demostrarían una sensible mejora en el desempeño socioeconómico del país en el periodo, atribuida a los cambios progresivamente realizados en el modelo. Apuntan, por ejemplo, al aumento del gasto social (hasta el inicio de la crisis internacional), que salta de un 11,9% del PIB en 2002 a un 13,45%, en 2008. El Programa Bolsa Familia, que ya existía desde 1998, tuvo el universo de beneficiarios enormemente ampliado (a once millones de familias) y el valor de la transferencia aumentado. Sumándose el PBF a otros beneficios, jubilatorios o asistenciales, el Brasil tenía, al final de 2010, un 34,1% de la población –principalmente aquellos estratos más necesitados– atendidos por algún tipo de beneficio (Pochmann, 2010). Se registra también un crecimiento de la formalización en el mercado de trabajo, que alcanza, en 2009, un 52% de la Población Económicamente Activa (PEA), ante una tasa de 44% en el año 2001, con la creación de más de 12 millones de empleos formales entre 2005 y 2008 (promedio de 1,5 millones por año), aunque estos empleos sean, en su amplísima mayoría de baja calidad y remuneración (menos de 2 salarios mínimos). No obstante, en paralelo fue registrado un importante crecimiento real del salario mínimo (24,25% en términos reales –descontada la inflación– durante el periodo) y de la participación de los salarios en el ingreso nacional. Pese a las limitaciones de un criterio exclusivamente basado en el ingreso, como es la división por estrato de ingreso en Brasil², y, además, con niveles iniciales tan bajos, en el periodo de 2003 y 2008, cerca de 32 millones de personas ascendieron a las clases A, B y C y fue registrada una reducción del 43% de la pobreza (Neri *et al.*, 2010; De Paula, 2011).

Al final del mandato, el gobierno de Lula tuvo que verse con el deterioro del ambiente económico internacional. El escenario benigno que había auxiliado en la reducción de la vulnerabilidad externa, caracterizado por términos de intercambio favorables y harta disponibilidad de crédito internacional, súbitamente se revierte. La interpretación que enfatiza la redefinición significativa del modelo suele señalar el relativo éxito del país, que sale entre los menos afectados por la turbulencia, al enfrentarse con la crisis, explicándolo por la actuación del gobierno al implementar políticas anticíclicas –sobre todo en el área fiscal–, pero sin relajamiento monetario de igual magnitud (lo que a posteriori fue señalado por muchos como una oportunidad perdida para bajar significativamente las tasas de interés). Por ende, las novedades en términos neodesarrollistas y redistributivos claramente autorizarían, en esta visión, a sostener la existencia de un cambio significativo en el modelo. La muy relevante ampliación de los programas sociales y de com-

plementación de los ingresos (Bolsa Familia al frente), tanto como el fomento al crédito dirigido a los segmentos de la base de la pirámide, confluirían hacia una apuesta desarrollista de conjunción entre inversión y consumo. El resultado sería un efectivo fortalecimiento y ampliación de un mercado de consumo de masas, en una dinámica virtuosa de mutuo refuerzo. Este nuevo impulso provendrá de los grandes grupos económicos volcados no apenas al mercado de consumo interno, sino también a la exportación y a grandes proyectos infraestructurales, hasta el importante impulso a la inversión privada oriundo de las obras del PAC y de los fondos de subsidios públicos de fuentes tan distintas como el BNDES, los demás Bancos públicos y las previsionales. Todo ello, para esa visión, contrastaría nítidamente con la orientación del gobierno anterior, lo suficiente como para postular una redefinición de la orientación previa.

c. La interpretación más radicalmente crítica: los cambios oligarquizadores

La tercera interpretación reúne elementos de las dos anteriores, pero a fin de ser fuertemente crítica. Esa crítica se puede denominar la de los “cambios oligarquizadores”. La perspectiva incorpora y profundiza el tema de la dinámica del capitalismo brasileño en la actualidad en lo que concierne a su nuevo patrón de acumulación. Asimismo, incorpora críticas hacia las relaciones entre Estado y capas empresariales, que serían opacas y marcadas por acentuados conflictos de interés.

Esta interpretación destaca el descenso de la participación relativa de la industria de transformación en la economía nacional, que pasa del 32,4%, en 1980, (en la época una de las más altas del mundo) a un 16,9%, en 2002, y un 15,5%, en 2009 (Cano & Da Silva, 2010). El país atraviesa la coyuntura internacional de valorización de las *commodities*, estirada por el crecimiento de la demanda global, con China al frente, sin lograr evitar que su inserción en la nueva división internacional del trabajo presente la clara tendencia hacia una especialización exportadora de bajo contenido tecnológico, centrada en el *agrobusiness*, las actividades extractivas y en la industria de bajo valor agregado, la llamada especialización regresiva. Más y más las exportaciones industriales se concentran en los mercados del entorno geográfico (aún así lentamente declinantes) y algunos sectores típicos de la Segunda Revolución Industrial, en los que hay fuerte y tradicional presencia de multinacionales o en que el país ocupó algún nicho de mercado, como automóviles, petroquímica y –la excepción que confirma la regla– aviones (Filgueras *et al.*, 2010).

Esa tendencia general puede afectar la estabilidad de las cuentas externas en caso de reversión del actual ciclo de valorización de los términos del intercambio, además de impactar negativamente en el nivel de ocupación y de ingreso, por no mencionar la extracción de recursos naturales no siempre renovables y la degradación ambiental. En relación con la política industrial, destaca que, aunque el gobierno tenga como directriz privilegiar las inversiones en sectores más intensivos en ciencia y tecnología, en la práctica la amplia mayoría de los recursos termina siendo direccionada para los grandes grupos productores de bienes intensivos en

recursos naturales (sectores de minería y siderurgia, etanol, papel y celulosa, petróleo y gas, hidroelectricidad y agropecuario), con lo que el gobierno también ahí termina por reforzar las tendencias ya existentes.

Además, el gobierno de Lula habría profundizado la concentración de capitales observada entre los grandes grupos empresariales brasileños, ahora tendientes a la multinacionalización. El meollo de la crítica está en cómo se articula, por medio del Estado, ese proceso de concentración, y qué rol es desempeñado por las instituciones financieras oficiales, en particular los fondos de pensión. La hipótesis sostenida por esta visión es que el gobierno de Lula habría continuado y profundizado un proceso de centralización y concentración de capitales, a través del fundamental apoyo financiero a grandes procesos de fusiones y adquisiciones (casos como el de la JBS y Bertim, Oi y Brasil Telecom, Perdigão y Sadia, Votorantim y Aracruz, Itaú y Unibanco, entre otros) (Tautz *et al.*, 2010). Se cuestiona la visión acerca de los impactos positivos de las grandes empresas creadas a partir del proceso de *pick up the winners* (elección de vencedores). Como observa Mineiro:

No período a partir de 2006, fica cada vez mais evidente um processo de reconcentração empresarial no país, com a criação de enormes conglomerados setoriais e multissetoriais. Essa concentração é estimulada por uma visão que prevalece no BNDES, bastante otimista a respeito dos impactos positivos das grandes empresas, por seu potencial financeiro, tecnológico, gerencial e de mercado, entre outros, e suas sinergias não apenas internas, mas também na articulação com uma cadeia de fornecedores, distribuidores e prestadores de serviços variados (Mineiro, 2010: 157).

Sin embargo, es sobre las intrincadas relaciones de propiedad que involucran al sector público y al privado donde reposan las críticas más agudas. La interpretación corriente de la historia brasileña reciente identifica los años de FHC con las privatizaciones, mientras que los años de Lula estarían marcados por el activismo en la consolidación del nuevo papel del Estado. Empero, bajando a un nivel mayor de detalles, hay quienes concluyen que, una vez completada la fase privatizadora en los años de FHC, la participación del Estado en la economía –por medio de los Bancos públicos, de los fondos de pensión y de otras entidades, y de las participaciones accionarias en los directorios de empresas privadas, además por supuesto de empresas como Petrobras– no sólo se mantuvo sino que se amplió. O sea, el sector público habría sido reestructurado para acompañar la fase privatizadora (véase Lazzarini, 2011). El BNDES, en particular, al jugar un papel clave en el proceso de privatización –trabajó como el gestor del programa de desestatización–, habría logrado consolidar su presencia en una multitud de empresas privatizadas, a través de su brazo en el mercado bursátil, el BNDESPar. El resultado es que el BNDESPar tiene hoy participación accionaria en 22 de las 30 mayores empresas multinacionales brasileñas (Tautz *et al.*, 2010). Proceso semejante ocurrió con los fondos de pensión estatales o paraestatales (como el Previ, de los empleados del Banco

do Brasil; Petros, de los de la Petrobras; y Funcef, de los de Caixa Econômica Federal) que, llamados a financiar las privatizaciones, se convirtieron en propietarios de parcelas significativas de las acciones de las empresas negociadas.

Chico (Francisco) de Oliveira destaca lo que considera haber sido una transformación en la posición de clase de un amplio sector que domina el PT. Sugiere que las capas más altas del antiguo proletariado habrían conformado una fracción de clase significativamente diferenciada al alcanzar la posición privilegiada de gestores de las fuentes más importantes de recursos públicos en Brasil, desde la estabilización económica.³ Esa clase o fracción de clase estaría dotada de “unidad de objetivos”, por haber sido formada en medio del consenso ideológico alcanzado sobre la nueva función del Estado, y estaría estratégicamente situada en esas posiciones de control de los recursos estatales y paraestatales, realizando una conexión con el sistema financiero. Oliveira, desde una perspectiva crítica de extracción marxista, va más allá:

É isso que explica recentes convergências programáticas entre o PT e o PSDB, o aparente paradoxo de que o governo de Lula realiza o programa de FHC, radicalizando-o: não se trata de equívoco, nem de tomada de empréstimo de programa, mas de uma verdadeira nova classe social, que se estrutura sobre, de um lado técnicos e economistas dobrés de banqueiros, núcleo duro do PSDB, e trabalhadores transformados em operadores de fundos de previdência, núcleo duro do PT (Oliveira, 2003: 147).

Otros comentaristas apuntan a la opacidad y la falta de debate con que las abultadas transferencias financieras hechas por el BNDES son realizadas. Son cuestionadas las ventajas traídas a los consumidores por los procesos de fusión de compañías financiados por el Banco y el impacto que esas transferencias –en especial aquellas costeadas por los préstamos del Tesouro Nacional al Banco– tienen sobre la deuda pública. Como el Banco presta a una tasa de intereses especial, la *Taxa de Juros de Longo Prazo* (TJLP), que los últimos años se ha situado hasta un 10% abajo de la tasa de referencia del Banco Central (Selic) puede legítimamente considerarse que son intereses “subsidiados”. El direccionamiento privilegiado de recursos públicos para algunos grupos empresariales “electos” genera, al final, cuestionamientos ineludibles sobre la transparencia y el carácter democrático del proceso. Se instaura el ambiente propicio para la proliferación de insinuaciones sobre relaciones “incestuosas” entre dirigentes políticos y grandes empresarios. La cuestión que se coloca es si, al final, el Estado dirige el proceso o si, al contrario, se somete a las determinaciones de los grandes grupos empresariales, o sea si no se estaría tomando equivocadamente por activismo estatal lo que en realidad consistiría en una interacción en la que los grupos empresariales más fuertes fijan el rumbo.

Fernando Henrique Cardoso, desde una matriz ideológica hoy bastante diferente de la de Oliveira, llega curiosamente a conclusiones semejantes. Sostiene

que el gobierno actúa de esa manera para crear un “bloque de poder capitalista-burocrático”, en lo que consistiría una reedición de las conocidas configuraciones en la relación entre la burguesía y el Estado, como el trípode empresa nacional-empresa transnacional-Estado, los “anillos burocráticos” típicos del desarrollismo del régimen militar. Las implicaciones para la democracia serían claras, con una concentración económica que sofoca las empresas medias y pequeñas y lleva a la concentración de los ingresos. La población costearía, por la vía de los impuestos (y los afiliados a los fondos de pensión por vía de los diferenciales en las tasas de interés), los favores concedidos al gran capital: *“O lulopetismo não está fortalecendo o capitalismo em uma sociedade democrática, mas sim o capitalismo monopolista e burocrático que fortalece privilégios e corporativismos”* (Cardoso, 2011).

Independientemente de la posición política desde donde se realiza la crítica, la interpretación de los cambios oligarquizadores coloca en primer plano lo que considera ser un fuerte proceso de concentración económica (así como de poder) en curso, antidemocrático bajo varios aspectos, posibilitado por la legitimación frente a los sectores subalternos de la sociedad por el fenómeno político del lulismo.

Parte II – El lulismo como fenómeno político

¿Cómo entender al lulismo como fenómeno político? Presentaremos aquí tres posiciones. La primera interpretación reduce al lulismo a un nuevo ropaje para las prácticas de fisiologismo y de la ocupación y reparto del gobierno, cuyo mayor interés es su perpetuación en el poder. La segunda sostiene que el lulismo es básicamente un fenómeno de liderazgo político, supra/extra partidario que, lejos de constituir un mero ejercicio fisiologista del gobierno, aportaría importantes contenidos de política, aunque se observen señales de una relación directa entre el liderazgo político de Lula y las masas en perjuicio de la movilización social. La tercera es nuestra propia hipótesis.

La primera interpretación de esta parte II se puede combinar tanto con la interpretación de condición de posibilidad número uno de la parte I (continuidad esencial del modelo complementado con más política social) como con la tercera (los cambios oligarquizadores). Ya la segunda interpretación de esta parte II puede estar vinculada a la primera interpretación de condiciones de posibilidad, pero normalmente se articula con la segunda (redefinición significativa del modelo). Nuestra propia interpretación extrae elementos de las tres condiciones de posibilidad de la parte I, pero posiblemente esté más próxima a la segunda de ellas.

La interpretación más abiertamente crítica: del énfasis en la rendición ante la lógica de la política tradicional, en el fisiologismo y en la ocupación (“aparelhamento”) del Estado

La primera interpretación reduce al lulismo básicamente al juego interpartidario de la ocupación y la administración del gobierno. Las gestiones de Lula y el propio Lula representarían una nueva forma de fisiologismo, una adaptación a la política partidaria tradicional y a las prácticas de acomodación de intereses sin mayor pro-

pósito que mantenerse en el poder gubernamental. Partiendo de trabajos hoy ya clásicos sobre la morfología política brasileña (Abranches, 1988; Nunes, 2003), esta primera línea interpretativa sostiene que el lulismo representa un impulso regresivo por reafirmar aspectos patrimonialistas de la cultura política del país.

Son características de lo que Abranches identificó como “presidencialismo de coalición”, la acentuada fragmentación de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional que, asociada a una saturación de las demandas impuestas al Ejecutivo, llevaría a constantes conflictos entre el Legislativo y el Ejecutivo. Además, la legislación electoral que desestimula la coincidencia entre el voto mayoritario y el proporcional haría que ningún partido logre conquistar individualmente una mayoría en el Congreso. En confirmación de esa característica, desde 1990, nunca el partido del presidente obtuvo más del 25% de las sillas en la Cámara de los Diputados. Así pues, los gobiernos tienen que valerse del loteo político del gabinete para reunir apoyos en el Congreso. Las coaliciones, aunque imprescindibles para gobernar, suelen constituirse como estructuras programáticamente heterogéneas e hinchadas, tendiendo por eso a la inestabilidad (Abranches, 1988).

Esta primera interpretación sostiene que, si bien es verdad que el lulismo no inventó el presidencialismo de coalición —en su texto, escrito en 1988 Abranches lo identifica en todos los gobiernos democráticos brasileños desde la República Velha— también es correcto que se amoldó a él a la perfección. En rigor de verdad, la primera estrategia adoptada por Lula no fue esa sino gobernar con un gabinete minoritario. La cronología de los hechos comienza con la elección de Lula, en 2002, encabezando una fórmula compuesta por el PT con partidos medios y pequeños (PL, PC de B, PMN y PCB). Antes de la asunción, otros siete partidos (PSB, PDT, PPS, PC de la B, PV, PL y PTB) fueron incorporados a la alianza, que, sin embargo, no llegaba a contar con un 50% de las bancas en la Cámara de los Diputados (granjeaba un 49,3%) (Amaral, 2010). También en la fase de transición, José Dirceu (entonces el principal operador político del gobierno) llega a negociar la adhesión del PMDB, pero es desautorizado por Lula.

El gobierno sufría la insatisfacción de sus bases en razón de la agenda de reformas pro-mercado propuesta por el equipo económico. Para aventar peligros de rebeldía entre los diferentes sectores del PT, Lula les otorgó cargos ministeriales en un número que no le permitió aplicar el manual del “presidencialismo de coalición”. En tanto, a pesar de no contar con la mayoría, consiguió aprobar la reforma de la seguridad social, con ayuda de partidos de la oposición (PSDB y PFL). En la secuencia de manifestaciones públicas de desacuerdo con el rumbo tomado, el PT expulsó a parlamentarios (en número muy poco significativo) vinculados a los sectores más a la izquierda del partido (que fundaron entonces el PSOL), en lo que fue interpretado por muchos como un mensaje de que no se admitiría el disenso parlamentario. El PDT dejó la alianza. Pero a mediados de 2004, Lula volvió atrás y se selló finalmente un acuerdo formal con el PMDB, por medio del cual el gobierno alcanzó la mayoría parlamentaria con un margen teóricamente confortable. Siguieron, sin embargo, las quejas de los demás partidos acerca de lo que consideraban una sobre-representación del PT en la máquina pública y mani-

festaciones de insatisfacción en relación con la distribución de ministerios y de los nombramientos para los cargos públicos en general.

Como prueba de que el ensamble gubernativo-partidario presentaba serias fisuras, sobrevino entonces la crisis del *mensalão*, esquema de corrupción (denunciado por el diputado Roberto Jefferson, entonces presidente nacional del PTB) consistente en la utilización de recursos de origen público y privado para la compra de apoyo parlamentario en el Congreso. El escándalo representó la mayor crisis interna de la historia del PT, alejó (en algunos casos, definitivamente) parte de su militancia, enajenó importantes apoyos en la sociedad, y llevó al gobierno a reevaluar su relación con el Congreso y, en particular, con el PMDB. Cabe aquí una contextualización sobre este partido. Para muchos comentaristas, éste sería el que mejor simbolizaría un tipo de agrupación común en la política brasileña, que ya fue llamado de “*centrão político*”. O sea, agrupaciones formadas por políticos de perfil ideológico bastante desdibujado, siendo pro-gobierno, no importando las orientaciones de la administración de turno, y siempre consagrados a la ocupación de espacios en la máquina pública y a la reproducción de las estructuras políticas tradicionales, muchas veces claramente clientelistas, en sus bases.

Marcos Nobre desarrolló una interesante interpretación sobre lo que llamó de “*pemedebismo*”, que es tomado como un trazo más amplio de la política brasileña, englobando otras fuerzas y yendo más allá inclusive del propio PMDB. Localiza la consolidación del fenómeno en la redemocratización brasileña, cuando la enorme efervescencia participativa verificada en la década de 1980 no fue acompañada por una democratización institucional equivalente. Al contrario, habría sido desarrollado un sistema que buscaba obstaculizar la aceleración de la democratización social, a través de un mecanismo de vetos que impide la emergencia de bloques hegemónicos suficientemente poderosos para imponer pérdidas definitivas a terceros: “la respuesta pemedebista canónica es el aplazamiento permanente de soluciones definitivas” (Nobre, 2010). Ese sistema tendría tendencia inherente a la parálisis, además de establecer enormes dificultades para la producción de “polarizaciones consistentes y duraderas” (Nobre, 2011).

Al sentir temblar el suelo bajo sus pies con el *mensalão*, Lula se volvió hacia la consolidación de la alianza con el PMDB. Para esa línea interpretativa, se habría completado, así, el proceso de flexibilización de la política de alianzas del PT, comenzado durante las elecciones de 2002 con el acuerdo con el Partido Liberal, organización de centro-derecha que indicó el vice de Lula, José de Alencar. El petismo, que antes propugnaba por la ruptura de la lógica política tradicional del país, se volvía entonces a la construcción de consensos con esas fuerzas tradicionales a las que en el pasado se oponía. Por medio de prácticas fisiológicas y de los instrumentos de cooptación de que dispone el Estado, el gobierno del PT habría consolidado su política de alianzas. Y lo habría hecho con más éxito que sus antecesores, ya que, en 2006, Lula logra unificar el PMDB en torno a su nombre, objetivo que había sido perseguido con ahínco, pero sin éxito, por sus antecesores inmediatos, FHC e Itamar Franco.

La versión más radical de esa línea interpretativa (Cf. Cardoso, 2009; Fausto, 2010) va más allá y apela para la denuncia de la erosión institucional y de la total degeneración del PT, que habría llevado, con la conquista del poder, a una disolución de las fronteras entre partido, gobierno y Estado. El Partido habría empleado expedientes muchas veces ilegales, que ya habrían sido utilizados en sus gobiernos locales y también en sus conexiones con la Central Única de los Trabajadores (CUT), para financiar campañas políticas cada vez más costosas. Además de eso, sería un partido cuyos militantes estarían fundamentalmente vueltos al “*aparelhamento*” del Estado, o sea, en las palabras de Fausto:

Pela primeira vez na história deste país, uma organização partidária que de fato estrutura as bases materiais e simbólicas da vida de um amplo contingente de quadros e militantes, e não apenas de um restrito conjunto de dirigentes, ingressa em cheio no Estado brasileiro (Fausto, 2010).

Pero esta interpretación es problemática en diversos sentidos. La corrupción es, por naturaleza, un fenómeno de difícil medición y, más allá del calor de la disputa política, no parece haber pruebas convincentes que el gobierno de Lula haya sido más corrupto que sus antecesores.⁴ Los gobiernos anteriores también necesitaron emplear medios semejantes para la gestión del presidencialismo de coalición. La excepción es el gobierno de Collor de Mello, muy corrupto pero enfrentado a los partidos y al Congreso, que terminó con su juicio político. Como es sabido, el buen gobernante necesita, muy a menudo, templar la “ética de la convicción” con la “ética de la responsabilidad”. Es posible que si Lula hubiera adoptado una estrategia totalmente diferente con relación al Congreso y a las élites políticas tradicionales, apelando al anti-institucionalismo y al gobierno plebiscitario, hubiera sido clasificado por buena parte de esos mismos críticos como “chavista”.

Otro punto débil de esta interpretación es que no da cuenta del siguiente problema: ¿cómo habría hecho una fuerza política en el gobierno, con medios exclusiva o centralmente fisiologistas y clientelares (tal lo que es aquí alegado), para dar cuenta de una democracia de masas y de audiencia? Es en esta dimensión donde los desempeños del liderazgo político (no ya apenas la distribución de prebendas a los séquitos partidarios) ocupan un papel primordial, y otro tanto puede decirse de las mutaciones efectivas, no particularistas ni clientelares, de la distribución del ingreso. Estos puntos permanecen en la oscuridad, así como otros que surgen más claramente en las dos interpretaciones siguientes.

La interpretación del fenómeno político supra/extra partidario, de representación de los pobres desde la cúspide (pelo alto)

La segunda interpretación sostiene que el lulismo es básicamente un fenómeno de liderazgo político, supra/extra partidario, que hasta ahora se ha expresado sobre todo electoralmente y ha proporcionado consenso a las gestiones de gobierno en torno a ciertos valores. Para esa interpretación, lejos de un ejercicio fisiologista

del gobierno, habría contenidos de política, en arreglo a determinados valores, que habrían configurado una nueva mayoría electoral, parcialmente diferente de aquella con la que Lula ganó sus primeras elecciones presidenciales en 2002. Esta interpretación destaca, no obstante, una amplia desmovilización de los movimientos sociales y organismos de la sociedad civil organizada y la construcción de una relación directa entre el liderazgo político de Lula y las masas.

El fenómeno del cambio de base de apoyo social, o realineamiento electoral, es notable en las elecciones de 2006. De hecho, es a partir de ese momento que el término “lulismo” comienza a ser empleado. En medio del escándalo del *mensalão*, Lula y el PT, que hasta entonces tenían en la ética en la política una de sus principales banderas, se habían desgastado de manera significativa en una parte importante de su base de apoyo tradicional: los sectores medios. El escándalo transcurre durante prácticamente todo el año 2005, y los medios de comunicación entran en 2006, año de elecciones presidenciales, explorando los despliegues de las denuncias. Hasta entonces, exponentes del marketing político defendían tesis, como la de los “círculos concéntricos” y la de los “formadores de opinión” en el país, que sostenían que los sectores medios, cuyas posiciones tienden a coincidir con la visión de los grandes medios, se encargarían de construir la opinión de las clases subordinadas. La elección de 2006 provoca un cortocircuito entre los creyentes de semejantes teorías, cuando Lula logra ser reelecto a pesar de todo el desgaste enfrentado por su gobierno en los dos años anteriores.

A partir del examen a posteriori del mapa electoral de 2006, se constata que el voto en Lula se concentra en los estratos más bajos de la población y en regiones, como el Norte y el Nordeste, donde éstos están más presentes. Se trata de lo que André Singer llamó el “realineamiento electoral”, es decir, un desprendimiento entre las preferencias electorales de los segmentos de clase media y de aquellos de baja o bajísima renta (Singer, 2009). El fenómeno es aún más estimulante si observamos que, por primera vez desde la redemocratización, esos estratos populares –que en el pasado habían sido decisivos para la elección de Collor frente al mismo Lula– se habían posicionado a favor de un candidato ubicado a la izquierda en el espectro ideológico.

La interpretación que ahora desarrollamos, tal vez mejor ejemplificada en los trabajos de Singer, sostiene que al tiempo en que actores políticos y opinión pública se ocupaban de los desdoblamientos del escándalo del *mensalão*, el gobierno de Lula operaba una revolución silenciosa en las periferias de las metrópolis y en los rincones postergados del país, a través de la valorización del salario mínimo, de la expansión y democratización del crédito y del Bolsa Familia y otros programas específicos (Luz para Todos, Brasil Sonriente, Pro Uni, etc.). Singer defenderá posteriormente que después del lulismo habría emergido una nueva y posiblemente duradera hegemonía, con todos los competidores necesariamente envueltos en un clima rooseveltiano de creación en Brasil, en un “corto espacio de algunos años” de una sociedad con base en la clase media (Singer, 2010).

Sobrevienen dos temas interrelacionados: las transformaciones vividas por los movimientos sociales en Brasil y la relación directa establecida por el lulismo con

los estratos más pobres de la sociedad. El gobierno promovió inequívocamente cierto grado de participación social. El mejor ejemplo fueron las sesenta Conferencias Nacionales de Derechos con las que se incentivó la participación sobre los más variados temas de la vida social. De dichas Conferencias tomaron parte más de 4 millones de personas. El gobierno también aprobó la creación de dieciocho Consejos para hacer frente a demandas históricas de los movimientos sociales. Se cuestiona, sin embargo, la efectividad de esos canales de participación, ya que no existía ningún mecanismo formal que garantizara que las deliberaciones emanadas de las Conferencias fueran plasmadas en políticas públicas o contempladas en los presupuestos gubernamentales. Se cuestiona, igualmente, si no fue registrada, en el periodo, una tendencia de aumento del control de las acciones sociales por el Estado, a través de vínculos económicos establecidos con las organizaciones sociales (ver Ricci, 2010).

La cuestión remite a los cambios operados en el interior del PT, ya que el partido contó, desde su creación, con una importante base en los movimientos sociales. En su origen, el PT, además de socialista, era identificado también por un ideario anti-estatal. Para varios comentaristas, el lulismo alteró fundamentalmente ese proyecto originario del PT. Es preciso observar, sin embargo, que los cambios en la orientación del partido datan de antes de la llegada de Lula al gobierno (Cf. Novaes, 1993). La dirección que gana el control a mediados de los años 1990 pone en marcha un proceso que acercará la estructura interna a la propuesta de organización partidaria clásica, en detrimento del participacionismo (Ricci, 2010). Aunque se preocupe en mantener alguna dinámica participativa –el PT es el único de los grandes partidos brasileños que elige por voto directo de sus militantes a su dirección partidaria– el sentido general de la trayectoria del partido percibido por la amplia mayoría de los observadores es el de progresiva profesionalización de sus dirigentes, en un contexto de participación en disputas electorales cada vez más caras, a un punto tal que, para los críticos, el partido hace mucho que dejó de lado la centralidad atribuida al debate interno y se convirtió en una “máquina de ganar las elecciones”.

Ricci observa que, a partir del marco jurídico creado por la Constitución de 1988, que prevé diferentes consejos ciudadanos y otras instancias de participación social, y de las experiencias de gestión participativa de gobiernos locales, progresivamente los movimientos sociales fueron relativizando su anti institucionalismo (Ricci, 2010). Durante el gobierno de Lula, con la incorporación (para los críticos, cooptación) de varios de los más destacados cuadros de la sociedad civil al gobierno, ese proceso se acentuó.

Los sindicatos siguieron un sendero semejante. Es cierto que tuvieron, bajo Lula, la preeminencia esperada de un gobierno liderado por un ex-sindicalista y formado por muchos ex-sindicalistas, aunque el balance de su actuación sea motivo de controversia. La crítica principal que se hace al lulismo desde el área laboral es que las políticas desarrolladas progresivamente por el gobierno van en la dirección opuesta a las posiciones históricas del PT. El Partido, junto a la *Central Única dos Trabalhadores* (CUT), ha defendido durante toda su historia el pluralismo sindical

y el fin del impuesto sindical, resquicio del modelo corporativista de control estatal implementado por Vargas. En 2004, el gobierno de Lula convocó a un foro sindical, a fin de diseñar una reforma en la legislación laborista. El foro terminó con resultados no concluyentes y el Gobierno adoptó progresivamente medidas que fortalecen el modelo sindical en vigencia. El pluralismo sindical fue garantizado, pero el impuesto sindical siguió en vigencia y sus recursos son dirigidos a las centrales, que luego se encargan de transferirlos a los sindicatos. Esa reforma reveló el poder mágico de traer la paz entre la CUT y su mayor rival, *Força Sindical*. Y como resultado, las burocracias sindicales han sido fortificadas en lugar de sus bases (Viana, 2011).

Los observadores se dividen entre aquellos que atribuyen lo que fue, en general, una época de relativa calma en el mundo del trabajo a la satisfacción de sus demandas y a un acceso sin precedentes por parte de cuadros sindicales a las altas posiciones del Estado; y otros que subrayan la existencia de un flujo de recursos financieros públicos de inédita dimensión dirigido hacia los sindicatos, generando un ambiente de complacencia y prácticamente ninguna oposición con relación a las políticas del gobierno. La creación de diversas instancias tripartitas de diálogo, como el Foro Nacional del Trabajo, las Conferencias Nacionales del Trabajo y el Consejo de Desarrollo Económico y Social, dividen igualmente opiniones. Están los que entrevén democratización social, y también aquellos que enfatizan los aspectos negativos de lo que sería una guiñada neocorporativista, en contradicción con lo que siempre había predicado el PT.

La excepción más notable del proceso que Rudá Ricci llega a cualificar como de “estatización” de los movimientos sociales (Ricci, 2010) tal vez sea el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), que mantuvo gran independencia durante todo el periodo. En tanto, ese Movimiento pasa por un visible debilitamiento durante el gobierno de Lula. Muchos observadores atribuyen a Bolsa Familia, en particular, y a la mejora relativa de la situación que enfrentan los sectores más pobres, en general, un movimiento de deserción de parte de las posibles reservas de excluidos para la ampliación del MST. Aunque absolutamente insatisfechos con los resultados de la política oficial de reforma agraria, los directivos del movimiento tuvieron que mantener relaciones ambivalentes con el gobierno por necesitarlo para avanzar con la agenda de los asentamientos y las políticas públicas volcadas a devenir económicamente viables a los agricultores ya asentados.

La observación de la desmovilización de los movimientos sociales se conjuga con la idea de que Lula habría construido una relación directa con las masas. En ese sentido, una de las interpretaciones más interesantes es la de Singer, que ve a Lula constituyendo la representación de los amplísimos sectores que no pueden representarse a sí mismos, mediante una plataforma que logra conjugar orden y distribución. Este punto es central, pues para el autor el lulismo supera resistencias duraderas de la población más pobre con relación al PT y a la CUT, siempre asociados por ese segmento a las huelgas y al “desorden”. El lulismo viene a atender el anhelo popular por una autoridad capaz de reducir la desigualdad sin constituirse en amenaza de inestabilidad. El subproletariado, recuerda el autor, es

una clase (o fracción de clase) particularmente difícil de organizarse: “*Atomizados pela sua inserção no sistema produtivo, necessitam de alguém que possa, desde o alto, receber a projeção de suas aspirações*” (Singer, 2009). El lulismo habría construido ese puente, al precio de la desmovilización de sindicatos, de organizaciones sociales y de la militancia de un partido que se había constituido casi en un movimiento (en poca sintonía con las tradiciones políticas del país).

Nuestra interpretación: el lulismo como expresión de la escisión entre la sociedad y el sistema político, y, a la vez, de su recomposición

La tercera interpretación es nuestra propia hipótesis, que está más próxima a la segunda que a la primera. La hipótesis es que el lulismo expresa (emerge en) la escisión entre la sociedad y el sistema político, al mismo tiempo que constituye su recomposición. Si bien expresa esta escisión de un modo muy especial, no populista, no la expresa oponiendo discursivamente el pueblo al palacio, la gente común a las élites. El momento crítico, el divisor de aguas de este proceso, fue por supuesto la crisis del *mensalão* de 2005. Ahí la escisión se consolida porque, en tanto Lula fue preservado de toda sospecha y del desprestigio (tal vez por un mecanismo del tipo “si el zar lo supiera”), el sistema político no lo fue. En verdad, con el *mensalão*, el PT, que era la excepción hasta ese momento, queda maculado a los ojos de una parcela significativa de la sociedad. Como siempre tuvo parte de su diferencial en la bandera ética, se convierte en ese momento en más de lo mismo. Pero ¿por qué la separación sociedad y sistema político no resulta explosiva? En parte porque Lula llena la brecha. Lula es institucional (Couto, 2011) y no se enfrenta a la clase política, no explota ese descontento para ganar apoyos. En rigor, Lula reestablece el nexo entre la política convencional y la sociedad, por lo que sustentamos que el lulismo es precisamente eso, el filamento incandescente que reconecta sociedad y política convencional.

El lulismo no es adversativo. Para gobernar la morfología política brasileña, en el marco de la cultura política brasileña, conflicto fóbica y acomodaticia, Lula no necesitaba para nada de adversatividad. La relación de Lula con la clase política tradicional, con los empresarios, con el establishment, en suma, fue de composición. También porque el cambio de orientaciones, de políticas y de aliados impedía esa adversatividad, so pena de caída en el ridículo. El lulismo se desprendió de los blancos de adversatividad tradicionales del petismo, y no los reemplazó por otros. Así Lula, *pai dos pobres*, los protege pero ¿de qué o de quiénes? Juan Lucca (2011) observa que Lula en los momentos álgidos ni siquiera les ponía nombre a los adversarios. Esto constituye una diferencia con relación a la CUT y el PT, quienes tienen un adversario bien claro, muy adjetivado y bien identificado. Lula es un gran ambivalente que pocas veces le pone nombre a las cosas en sus discursos (y con eso logra sumar apoyos de sectores que parecerían en principio muy antagónicos). Hay excepciones, es cierto, como luego del *mensalão*, cuando su discurso se vuelve más irascible, pero aún ahí nunca pasa de la denominación de “opositores” a quienes lo inculpaban, mientras desde el PT ya hablaban de la “derecha desestabilizadora” (Lucca, 2011).

Además, el petismo es una identidad, el lulismo no. Y Lula no es un liderazgo del PT mayor que el PT; es un liderazgo diferente al PT mayor que el PT. La adversatividad tan distinta presentada por lulismo y petismo es central, ya que permite diferenciar a ambos. Incide ahí una cuestión discursiva relevante. Mientras que en el PT, sea por convicción, sea por hábito vacío, todavía se sigue apelando a la noción de lucha de clases para su formulación de la realidad política, Lula opera en el ámbito de la concertación pluriclasista (Ricci, 2011) y tiene discursivamente a los desposeídos como pobres, no como el proletariado. El Lula de 1989 (y el de antes), claro está, no tenía esa adversatividad tan tibia. Lula realiza una transición bastante amplia en ese sentido, primero convenciéndose, en 1989, de que podría realmente llegar al poder por la vía electoral y luego incorporando la noción de la importancia de la conquista del centro en la disputa de elecciones mayoritarias, hasta llegar al “Lula paz y amor” de los comicios de 2002, en la elección que lo consagra presidente (y que consagra la transformación de Lula) por un margen de votos muy superior al del PT.

Evidentemente, puede haber determinadas coyunturas que exijan adversatividad (y algo de populismo). En 2006 Lula había sufrido un golpe al no ganar en la primera vuelta; para reponerse y no entrar debilitado en la segunda Presidencia necesitaba algo más que ganar, necesitaba una victoria concluyente. Se apela entonces a una súbita ideologización del debate (no en el sentido de un registro de izquierda, sino de una suerte de nacionalismo estatista), que va en contra de toda la tendencia anterior de su actuación, desde la campaña de 2002. ¿Algo semejante había ocurrido en la crisis del *mensalão*? Lula tuvo un impulso de apelar a las calles y a la sociedad civil organizada apostando a la división de la sociedad, pero lo refrenó.

¿Podemos hablar del lulismo como de una identidad no adversativa? Nos parece que hasta ahora no. Lula no ha hecho un esfuerzo de interpelación identitaria, el lulismo no es una identidad, es un liderazgo popular. El experimento clave de este liderazgo de Lula fue la proyección y el triunfo de Dilma. La inobservancia de una interpelación identitaria por el lulismo se conjuga con la característica histórica del país de que los sectores populares tienen extrema dificultad para desarrollar identidades horizontales. O’Donnell apunta a la serialización de la sociedad brasileña y observa:

(...) simplemente, ha habido poco a re-presentar en la política de una sociedad en la cual “los de abajo” no han logrado formas de organización ni identidades políticas relativamente autónomas de las clases y sectores dominantes (O’Donnell, 1984).

En ese sentido, el lulismo debe ser visto bajo la perspectiva de la trayectoria histórica de la sociedad brasileña desde la redemocratización. La recuperación de la democracia por la sociedad, que tuvo como marco jurídico y político principal la Constitución de 1988, no fue enteramente capaz de romper con la ciudadanía regulada (Santos, 1979) y garantizar que los derechos asignados a los sectores populares, en la letra de la ley, fueran dotados de exigibilidad y efectivamente

implementados. En síntesis, la vuelta del régimen democrático no se tradujo automáticamente en democratización de Estado y sociedad.

Lo que desarrolla Lula en el gobierno no consiste en un modelo redistributivo ni de poder político ni de poder social. Al lado de la desmovilización que representó su gobierno, tampoco cualquier reforma estructural fue implementada. Sin embargo, tiene un elevado potencial de creación de condiciones para la redistribución social y política, al incluir, entendemos que irreversiblemente, a las masas a la ciudadanía tanto política como social. O sea, va en la tradición brasileña de acomodación de intereses, más que en la del conflicto. No obstante todas las limitaciones, se trata de una novedad extraordinaria, porque los intereses que se acomodan, aún constituidos desde arriba, son los de las masas antes excluidas.

El lulismo en el gobierno, ¿combinó las cuatro gramáticas políticas brasileñas de Edson Nunes (2003) (clientelismo, universalismo de procedimientos, aislamiento burocrático, corporativismo)? Sí, como otros gobernantes en el pasado, sobre todo los más exitosos, como Getúlio Vargas o Juscelino Kubitschek, y también su antecesor y blanco de comparación más frecuente, FHC. La corrupción puede ser rampante, como insiste la opinión pública, pero es acotada en el sentido de que áreas clave quedan bien preservadas. Sí está en vigor un capitalismo de lazos (Lazzarini, 2011), densas redes accionarias público-privadas. Pero a diferencia, por ejemplo, de los nexos argentinos, los lazos brasileños están más institucionalizados y son menos particularistas. Y en general se puede decir que la burocracia brasileña, por debajo de la capa que es loteada, presenta niveles razonables de eficiencia y honestidad. La sempiterna tradición de las burocracias brasileñas, bifurcadas en áreas de eficiencia aisladas y cotos clientelares de caza, parece gozar de buena salud hasta ahora.

Si el lulismo es inseparable del dinamismo socioeconómico de los sectores populares brasileños en la última década, lo más importante es colocarlo en el marco de las culturas y de los imaginarios de las clases populares. Como ya hemos mencionado, entre 2003 y 2008, cerca de 32 millones de personas dejaron las clases D y E (Neri *et al.*, 2010; Barros *et al.*, 2009). Son personas que indudablemente tienen lazos de profunda identificación con Lula y con su trayectoria de vida. No son personas politizadas o que profesen cualquier ideología, sino absolutamente pragmáticas, como la propia obra política de Lula en el gobierno. Su llegada a la ciudadanía no fue determinada por una construcción colectiva volcada a la garantía de derechos, sino por un incremento en los niveles de consumo. No disponiendo de capital cultural, dependen exclusivamente de la fuerza de su trabajo para mantenerse en el umbral recientemente alcanzado, y de eso no tienen ninguna garantía (v.g. los *batalhadores* de Souza, 2010).

Consideraciones finales


De las discusiones anteriores, tal vez la conclusión más importante que se pueda desprender tiene que ver con la morfología social histórica brasileña y con los imaginarios populares. En la sociedad brasileña el progreso individual tiene prevalencia sobre la lucha de clases y es fuerte la idea de ascenso social individual, más

que la de conflicto social (Brasil es una sociedad excluyente pero a la vez la movilidad social es intensa). El éxito del lulismo está en que “realiza” el imaginario de movilidad social popular, el de un cambio no conflictivo. Por otra parte, la historia del mismo Lula, del nordestino migrante, facilita esta identificación de luchador que logra ascender desde muy abajo y por su propio esfuerzo. El lulismo expresa y vehiculiza la realización de ese ascenso social, lo “hace posible” y se identifica con él. La gestión de Lula ha sido una gestión de muy intensa movilidad social, y es importante tener claro que lo que ocurrió en esos años fue ascenso social y no la consolidación de una clase, ya que, en general, los que mejoraron sus condiciones de vida no consolidaron su posición social, sino que “ascendieron”. Tanto es así que se “inventó” la clase C y se discuten sus formas.

Ya se notan las profundas conmociones sísmicas sociales, políticas y —no menos estrepitosas— culturales de la emergencia de esa “nueva clase media”. Se discute, por ejemplo, si, una vez consolidado y mayoritario, este extracto reforzaría su supuesto conservadurismo innato. Y la ironía es que algunos de los involucrados en los movimientos políticos que propugnaran, en la historia reciente del país, por la conquista para los sectores populares de las mínimas condiciones para definir sus intereses e identidades, siendo capaces, finalmente, de tener voz en la discusión sobre qué tipo de sociedad sería posible y deseable construir, ahora —aunque por motivos opuestos a los defensores del status quo— no aprueban lo que ven y escuchan. Abundan las acusaciones de que Lula despolitiza la cuestión de la desigualdad, de que no respetó el mandato recibido de las urnas o que —en síntesis— el lulismo es regresivo para la constitución de una identidad popular horizontal. Pero, ¿Lula no sería, antes de todo, un inigualable intérprete de la voluntad popular?

Tal vez en algunas de las políticas de su gobierno se pueda encontrar una respuesta. El Bolsa Familia conquistó alguna fama internacional y es tomado muy a menudo como el programa símbolo de las administraciones Lula y de su éxito. Sin embargo, proponemos aquí que el Pro Uni tal vez lo represente aún más fidedignamente, por incorporar una serie de contradicciones, sus superaciones y, al final, conquistar el éxito (que la sociedad brasileña podría esperar honesta y razonablemente en ese campo en aquel momento). El Pro Uni, como se sabe, subsidia el acceso de alumnos de familias de bajo ingreso a las universidades privadas, por medio de la exigencia de contrapartidas por renuncias fiscales para la rama de la educación privada que desde hace mucho ya estaban previstas por la ley. Para ser implementado Lula tuvo que vencer, de entrada, la convicción ideológica de su partido que no admitía la idea de la privatización de la educación y de que ésta no fuera garantizada como un derecho universal y gratuito.

Las universidades públicas, que tradicionalmente sirven a las clases medias, en lo que es generalmente considerada una enorme distorsión social, doblaron su oferta de vacantes durante los dos gobiernos de Lula. Asimismo, en un intento de democratización algo polémico, fueron introducidos cupos raciales y, en algunos casos, de nivel de renta. Aun así, la oferta de vacantes es muy inferior a la demanda. Además, hay fortísimos intereses privados, sin lugar a dudas, por detrás del programa. Basta recordar que el ministro de Relaciones Institucionales de gran

parte del segundo mandato es un exitoso empresario del ramo de la educación privada. De una manera u otra, el programa posibilita que 600 mil jóvenes tengan acceso a un curso de nivel superior, de mala calidad en la amplia mayoría de los casos, es verdad, pero al fin y al cabo, un curso superior. Desde el punto de vista del desarrollo social de mediano y largo plazo tal vez sea uno de los mayores éxitos de su administración. Aunque la frase de Otto Von Bismarck – “la política es el arte de lo posible”– fuera comúnmente citada por FHC, fue Lula quien la llevó hasta las últimas consecuencias. 

Referencias

1. La llamada *Carta ao Povo Brasileiro* fue un documento divulgado por la cúspide *petista* durante la campaña presidencial de 2002, con el objetivo de tranquilizar a los mercados financieros que, temiendo el éxito electoral próximo de Lula, promovían una fuga de capitales del país. La *Carta* afirmaba el compromiso con el cumplimiento de los contratos previamente firmados y prometía equilibrio y prudencia en la conducción de la política macroeconómica, por lo que es ampliamente tomada como un marco de la transición realizada por el partido desde las posturas rupturistas defendidas en su historia previa hacia una actitud de no confrontación con los mercados, adoptada una vez en el poder.

2. Brasil adopta oficialmente, para la definición de pobreza y pobreza extrema, el criterio del Banco Mundial, que caracteriza como pertenecientes a las dos categorías los individuos con ingresos menores a US\$ 2 y US\$ 1 por día, respectivamente.

3. Los fondos de seguridad social complementaria ya mencionados, el FGTS (*Fundo de Garantia por Tempo de Serviço*) y el FAT (*Fundo de Amparo do Trabalhador*).

4. En un trabajo específico sobre la corrupción en el *Partido dos Trabalhadores*, Wendy Hunter (2007) afirma: “*O apoio financeiro empresarial é considerado o mais decisivo nas campanhas presidenciais. A falta de recursos econômicos sugere o porquê de o PT ter se sentido pressionado a recorrer aos esquemas de ‘caixa dois’ nos municípios onde controlava a prefeitura. (...) é inegável que os outros partidos se comprometeram com a prática do caixa dois. Porém, meu argumento é que o PT estava sob pressão excepcional para planejar tais esquemas e participar deles, já que não desfrutou do influxo de fundos legais dos grandes empresários disponíveis aos seus concorrentes.*”

Con la llegada al gobierno federal, el Partido vive la continuidad de los mismos dilemas oriundos de su posición singular en el sistema político: “*o PT queria montar um governo sem respeitar as regras informais do presidencialismo de coalizão*”.

Sobre si el gobierno de Lula habría sido más o menos corrupto que los anteriores, es muy incierta cualquier afirmación. Lo que hay de “científico” al respecto son los rankings de Transparencia Brasil y Transparencia Internacional, que no apuntan cambios importantes durante el gobierno de Lula. Pero incluso estos rankings padecen, por la propia naturaleza del fenómeno que buscan mensurar, de debilidades metodológicas de difícil superación.

Bibliografía

S. ABRANCHES (1988), “Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro”, en *Dados*, V. 31, N° 1, p. 5-38.

O. AMARAL (2010), “Adaptação e resistência: o PT no Governo Lula entre 2003 e 2008” en *Revista Brasileira de Ciência Política*, V. 4, p. 105-134.

P. ANDERSON (2011), “Lula’s Brazil” en *London Review of Books*, Vol. 33, N° 7.

R. BARROS y otros (2009), “Markets, the State and the dynamics of inequality: Brazil’s case study” en L. F. LÓPEZ-CALVA & N. LUSTIG (eds.), *Declining Inequality in Latin America: A Decade of Progress?*, Washington, Brookings Institution Press.

P. L. BARROS SILVA y otros (2010), “Lula’s Administration at a Crossroads: The Difficult Combination

of Stability and Development in Brazil”, en K. WEYLAND (comp.), *Leftist Governments in Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.

M. BRUNO (2010), “Endividamento do Estado e setor financeiro no Brasil: interdependências macroeconômicas e limites estruturais ao desenvolvimento”, en J. P. A. MAGALHÃES (comp.), *Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico 2003-2010*, Rio de Janeiro, Garamond.

W. CANO & A. L. G. DA SILVA (2010), “Política industrial no governo Lula”, en J. P. A. MAGALHÃES (comp.), *Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico 2003-2010*, Rio de Janeiro, Garamond.

F. H. CARDOSO (2011), “O papel da oposição” en *Interesse Nacional*, 13, abr/jun.

F. H. CARDOSO (2009), “Para onde vamos?”, en *O Estado de S. Paulo*, 01/11.

C. G. COUTO (2011), “O governo Lula e as perspectivas de Dilma Rousseff”, en *Iberoamericana, América Latina – España – Portugal*, Vol. XI, Nº 41, pp. 159-163.

M. DE PAULA (Org.) (2011), “*Nunca antes na história desse país*”...? *Um balanço das políticas do Governo Lula*, Rio de Janeiro, Fundação Heinrich Böll.

C. DIEGUEZ (2010), “O desenvolvimentista”, *Piauí*, Nº 49, out.

S. FAUSTO (2010), “A outra face do lulo-petismo”, en *Folha de S. Paulo*, 26/09.

FILGUERAS y otros (2010), “Modelo liberal-periférico e bloco de poder: política e dinâmica macroeconômica nos governos Lula”, en J. P. A. MAGALHÃES (comp.), *Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico 2003-2010*, Rio de Janeiro, Garamond.

W. HUNTER (2007), “Corrupção no Partido dos Trabalhadores”, en J. NICOLAU; T. POWER, *Instituições representativas no Brasil: balanço e reforma*, Belo Horizonte, Editora UFMG.

P. R. KINGSTONE y A. F. PONCE (2010), “From Cardoso to Lula: The Triumph of Pragmatism in Brazil”, en K. WEYLAND, *Leftist Governments in Latin America*, Cambridge University Press.

S. G. LAZZARINI (2011), *Capitalismo de laços*, Rio de Janeiro, Elsevier.

J. B. LUCCA (2011), “Estudio comparado de la identidad partidaria sindical durante el gobierno de Lula da Silva, Brasil, 2003 - 2006 y de Néstor Kirchner, Argentina, 2003 - 2007”, Tesis de Doctorado, FLACSO, Sede Académica Argentina, Buenos Aires.

J. P. A. MAGALHÃES (2010), “Estratégias e modelos de desenvolvimento”, en J. P. A. MAGALHÃES (comp.), *Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico 2003-2010*, Rio de Janeiro, Garamond.

A. S. MINEIRO (2010), “Desenvolvimento e inserção externa: algumas considerações sobre o período 2003-2009 no Brasil”, en J. P. A. MAGALHÃES (Org.), *Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico 2003-2010*, Rio de Janeiro, Garamond.

M. NERI y otros (2010), “Atlas do bolso dos brasileiros”, en M. F. P. COELHO y otros (Org.), *Políticas sociais para o desenvolvimento: superar a pobreza e promover a inclusão*, Brasília, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, UNESCO.

M. NOBRE (2010), “O fim da polarização”, en *Piauí*, dec.

M. NOBRE (2011), “O condomínio peemedebista”, en *Folha de S. Paulo*, 15/05.

C. A. M. NOVAES (1993), “PT: Dilemas da Burocratização”, *Novos Estudos Cebrap*, São Paulo, Nº 35.

J. M. N. NOVELLI (2010), “A questão da continuidade da política macroeconômica entre o governo Cardoso e Lula”, *Revista de Sociologia Política*, Curitiba, V. 18, p. 227-240, jun.

E. NUNES (2003), *A gramática política do Brasil: clientelismo e insulamento burocrático*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora.

G. O’DONNELL (1984), “¿Y a mí, qué me importa? Notas sobre sociabilidad y política en Argentina y Brasil”, en *Centro de Estudios de Estado y Sociedad*, Buenos Aires, <http://www.cedes.org.ar/Publicaciones/Est_c/Est_c1984,8.pdf>, último acceso en 20/12/11.

F. OLIVEIRA (2003), *Crítica à razão dualista/ O ornitorrinco*, São Paulo, Boitempo Editorial.

F. OLIVEIRA (2010), “Hegemonia às avessas”, en F. OLIVEIRA (comp.), *Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira*, São Paulo, Boitempo.

M. POCHMANN (2005), “A força da visão neoliberal” en *Carta Maior*, 20/5, <www.agenciartamaior.uol.br/boletim/imp_boletim.asp?id=1240> último Acesso en 04/20/2005.

M. POCHMANN (2005), “Pobreza, desemprego e desigualdade: notações importantes sobre o cenário recente no Brasil metropolitano”, en M. F. P. COELHO y otros (Org.), *Políticas sociais para o*

desenvolvimento: superar a pobreza e promover a inclusão, Brasília, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, UNESCO.

C. E. S. PINHO (2011), “Os governos de esquerda no cenário pós-neoliberal: o discurso (e a prática) em defesa de uma estratégia nacional de desenvolvimento”, Seminario Sociologia e política: repensando desigualdades em novos contextos, Curitiba, UFPR.

T. J. POWER (2010), “Democracy as a Late Bloomer: Reevaluating the Regime in the Cardoso-Lula Era”, en *Latin America Research Review*, Special Issue, Vol. 45.

D. RIBEIRO & R. KFOURI (2010), “A nova integração regional e a expansão do capitalismo brasileiro na América do Sul”, en *Observador On-Line*, V. 5, N° 4, abr.

R. RICCI (2010), *Lulismo: da era dos movimentos sociais à ascensão da nova classe média brasileira*, Rio de Janeiro, Contraponto Editora.

SECOM (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) (2009), *Caderno Destaques*, nov/dec, Brasília.

W. G. SANTOS (1979), *Cidadania e Justiça*, Rio de Janeiro, Campus.

J. SICSÚ (2010), “Números da distribuição de renda”, en *Folha de S. Paulo*, 13/10, <<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1310201007.htm>> último acceso en 22/11/2010.

A. SINGER (2009), “Raízes sociais e ideológicas do lulismo”, en *Novos Estudos Cebrap*, N° 85.

A. SINGER (2010), “O lulismo e seu futuro”, en *Revista Piauí*, oct.

J. SOUZA (2010), *Os batalhadores brasileiros*, Belo Horizonte, Editora UFMG.

C. TAUTZ *et al.* (2010), “O BNDES e a reorganização do capitalismo brasileiro: um debate necessário”, en J. P. A. MAGALHÃES (Org.), *Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico 2003-2010*, Rio de Janeiro, Garamond.

L. W. VIANA (2011), “Os sindicatos e a política”, en *Valor Econômico*, 01/31, <<http://www.valoronline.com.br/impresso/politica/100/376209/os-sindicatose-a-politica>> último acceso en 02/10/2011.

Recibido: 02/03/12. Aceptado: 14/05/2012.



Thiago Melamed de Menezes y Vicente Palermo, “Gobierno de Lula y Lulismo: examinando algunas hipótesis sobre las condiciones de posibilidad y la naturaleza del lulismo”. Revista *Temas y Debates*. ISSN 1666-0714, año 16, número 23, enero-junio 2012, pp. 13-37.